



ÁFRICA SUBSAHARIANA

SOMALIA: Se disparan las alarmas por el impacto de la crisis sanitaria y de seguridad en el país

SUDÁN DEL SUR: Naciones Unidas y voces expertas advierten sobre los altos niveles de violencia y la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en el país

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: La OMS, acusada de no prever y abordar el abuso sexual generalizado durante la crisis del ébola en el país.



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

EGIPTO: Alertan sobre vulneraciones a los derechos humanos en el país y sobre los riesgos añadidos de las detenciones arbitrarias en contexto de pandemia.

IRAQ: El país afronta elecciones anticipadas en un clima de escepticismo y de crisis económica y social acentuada por la COVID-19.

TÚNEZ: Se agudiza la crisis política en el país tras la decisión del presidente de suspender el Parlamento y concentrar poderes.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

COLOMBIA: Naciones Unidas advierte que casi 300 ex combatientes de las FARC han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz.

MÉXICO: A pesar de las medidas restrictivas vinculadas a la gestión de la pandemia, en 2020 se registraron más de 36.000 asesinatos y se mantuvo la misma tasa de homicidios de años anteriores.

NICARAGUA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Gobierno a cesar su intimidación contra el personal médico y científico crítico con la gestión de la pandemia.



TEMAS GLOBALES

ÁFRICA: Persiste la desigualdad en la distribución y acceso a la vacuna de la COVID-19.

MEDIO AMBIENTE: Las restricciones vinculadas a la pandemia provocan en parte el incremento de asesinatos de defensores del medio ambiente en todo el mundo.



ÁFRICA SUBSAHARIANA

SOMALIA. Se disparan las alarmas por el impacto de la crisis sanitaria y de seguridad en el país

SUDÁN DEL SUR. Naciones Unidas y voces expertas advierten sobre los altos niveles de violencia y la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en el país

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: La OMS, acusada de no prever y abordar el abuso sexual generalizado durante la crisis del ébola en el país

GUINEA: El país padece un golpe de Estado

GUINEA

El país padece un golpe de Estado

El 5 de septiembre soldados de las fuerzas especiales dirigidas por el teniente coronel Mamady Doumbouya dieron un golpe de Estado y tomaron el poder en Guinea, arrestando al presidente Alpha Conde. Según los informes, la acción dejó un balance de al menos diez personas asesinadas, principalmente soldados de la Guardia Presidencial en la capital, Conakry. La nueva Junta Militar, autodenominada National Rally and Development Committee (CNRD), anunció la disolución del gobierno, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras. Posteriormente, la junta nombró gobernadores militares, prohibió a los funcionarios gubernamentales salir del país y arrestó a varios políticos. El golpe provocó una condena internacional generalizada. El bloque regional de África Occidental (ECOWAS) condenó los acontecimientos y amenazó inicialmente con sanciones si Conde no era liberado y se restablecía el orden constitucional. Posteriormente, la ECOWAS suspendió a Guinea del organismo, envió una misión de alto nivel al país y decidió congelar las cuentas bancarias e introducir prohibiciones de viaje para los miembros de la Junta Militar y sus familias. ECOWAS también exigió a los golpistas la celebración de elecciones en un plazo de seis meses. Por su parte, la Unión Africana respaldó a la ECOWAS y también suspendió a Guinea de todas las actividades y órganos de toma de decisiones del organismo.

La nueva Junta Militar inició el 14 de septiembre un periodo de consultas con líderes políticos, religiosos y empresariales con el fin de establecer un gobierno de transición, y a finales de mes dio a conocer una hoja de ruta transicional, sin aclarar el periodo de tiempo para devolver el poder a un gobierno civil. Este es el tercer golpe militar que se produce en la región desde el pasado mes de abril (Malí y Chad). Además, tal y como ocurrió en Malí y en Chad, todos ellos han estado liderados por miembros de las fuerzas especiales del país, en el caso de Mamady Doumbouya, comandante de las fuerzas especiales de Guinea y ex legionario extranjero francés. El golpe de Estado se produce en medio de la crisis sanitaria

que padece el país, que al igual que los diferentes países de la región de África Occidental, experimentó durante el mes de agosto el mayor número de muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según datos de la OMS-África. Al impacto de la COVID-19 en el país se suma el hecho de que Guinea se encuentra también afectada por los virus del Ébola (ya controlado) y Marburgo. El caso del virus de Marburgo, una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa de la misma familia que el Ébola, convirtió a Guinea en el primer país de África Occidental en registrar este tipo de virus.

- Lynsey Chutel, “Amid Fears of Ebola, West Africa Records Its Highest Number of COVID-19 Deaths Yet, Says WHO”, *News24*, 19 de Agosto de 2021.
- DW, “West African Leaders Impose Sanctions on Guinea Junta”, *DW*, 17 de septiembre de 2021.
- Reuters, “Guinea Junta Starts Transitional Government Talks Following Coup”, *Reuters*, 15 de septiembre de 2021.
- News 24, “ECOWAS Suspends Guinea after Coup,” *News24*, 9 de septiembre de 2021.
- Boubacar Diallo y Krista Larson, “Soldiers Detain Guinea’s President, Dissolve Government”, *AP News*, 6 de septiembre de 2021.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La OMS, acusada de no prever y abordar el abuso sexual generalizado durante la crisis del ébola en el país.

En medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 en el continente africano, un reciente informe realizado por la comisión Independiente sobre la respuesta a al virus del ébola en la República Democrática del Congo ha concluido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “no previno ni abordó el abuso sexual generalizado durante la respuesta al ébola” en el país. La investigación se desencadenó después de la denuncia de The New Humanitarian y Reuters, en la que señalaban que más de 50 mujeres acusaron a funcionarios de la OMS, agencias de la ONU y organizaciones humanitarias de explotación y abuso sexual durante la crisis de 2018-2020. La OMS desempeñó un papel central en la



ÁFRICA SUBSAHARIANA

respuesta internacional al décimo brote de la enfermedad por el virus del ébola en el este de la RD Congo entre agosto de 2018 y junio de 2020, periodo en el cual 3.481 personas se infectaron con la fiebre hemorrágica (ébola) y 2.299 personas perdieron la vida, siendo el segundo brote más mortífero de la historia del país. The New Humanitarian sostuvo que si bien el personal de la OMS tuvo conocimiento de las denuncias en mayo de 2019, no fue hasta octubre de 2020 que se estableció la citada comisión independiente, que tardó otros siete meses (abril 2021) en iniciar el trabajo de entrevistas con las víctimas, tal y como recoge el informe final de la comisión. En su conjunto, el informe sostiene que se realizaron unas 150 entrevistas a víctimas, de las cuales al menos nueve sostuvieron que habían sido violadas, incluida una niña de 13 años. Las denuncias involucraron a personal de la OMS nacional e internacional. Según el informe, los abusos provocaron 29 embarazos. La comisión también resaltó que solo una parte del personal de la OMS involucrado en la respuesta al ébola (371 de unos 2.800) habían participado en capacitación sobre cómo prevenir el abuso y la explotación sexual, y que más del 73% de las funciones de respuesta estaban ocupadas por hombres.

En sus conclusiones, la comisión señaló los siguientes aspectos identificados en la investigación: claras fallas estructurales y falta de preparación para manejar los riesgos de incidentes de explotación y abuso sexual; negligencia individual; percepción de impunidad del personal de la institución por parte de las presuntas víctimas; alta vulnerabilidad de algunas presuntas víctimas y apoyo limitado que recibieron. Frente a ello, se establecieron una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar y fortalecer las políticas y procedimientos para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual; las actividades de sensibilización entre las comunidades afectadas; el acceso a la asistencia y derecho a reparación de las víctimas; entre otras. Tras la presentación de las conclusiones por parte de la comisión, el director general de la OMS señaló que era un “día oscuro para la OMS”. Por otro lado, otro informe presentado en agosto por la organización Congo Research Group (CRG) denunció que la respuesta (nacional e internacional) para contener la crisis del ébola en el país entre 2018-2020 no solo se vio afectada por la violencia, sino que también contribuyó involuntariamente al conflicto. El informe denuncia que la respuesta sanitaria adoptó un enfoque militarizado con el fin de protegerse de los ataques armados y reducir la resistencia de la comunidad, convirtiéndose en un actor del conflicto. A través de agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) y en colaboración con el Ministerio de Salud congoleño, se acordó pagar tanto a las fuerzas de seguridad gubernamentales como a grupos armados no estatales. Según CRG la OMS estuvo particularmente

involucrada en estos pagos, en contradicción con el procedimiento operativo estándar de la ONU. El informe describe cómo estos pagos mantuvieron un círculo vicioso de resistencia y violencia, ya que algunos grupos armados no dudaron en favorecer que se prolongara la epidemia para seguir beneficiándose de lo que se ha denominado «Negocio del Ébola». Durante 20 meses, se gastaron entre 489 y 738 millones de dólares en la lucha contra el ébola en el este de la RD Congo.

- Independent Commission, *Final Report of the Independent Commission on the review of sexual abuse and exploitation during the response to the 10th Ebola virus disease epidemic in DRC*, 27 de septiembre de 2021.
- Robert Flummerfelty y Paisley Doods, *Sex abuse scandal rocks World Health Organization, but what now?*, *The New Humanitarian*, 29 de septiembre de 2021.
- Congo Research Group, *Rebels, Doctors and Merchants of Violence. How the fight against Ebola became part of the conflict in eastern DRC*, 5 de agosto de 2021.

SOMALIA

Se disparan las alarmas por el impacto de la crisis sanitaria y de seguridad en el país

Diferentes informes han alertado de la preocupante crisis humanitaria, sanitaria y de vulneración de derechos humanos que se vive en el país. En un reciente informe, Amnistía Internacional denunció el deterioro del sistema de salud nacional debido a la pandemia de coronavirus, que está teniendo un enorme impacto en la población. A través de diferentes testimonios de médicos somalíes, la organización denuncia la incapacidad del sector sanitario de atender a las personas infectadas por la COVID-19, que están falleciendo sin recibir atención médica. Si bien oficialmente el país registra alrededor de 16.000 infecciones y casi 900 muertes por COVID-19, sanitarios somalíes denuncian que el número es mucho mayor, ya que las estadísticas solo contemplan a aquellas personas que han logrado atención en los centros de salud. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento urgente al gobierno somalí para ampliar la inversión en la sanidad, denunciando que el gobierno solo asigna el 2% de su presupuesto a la atención médica, mientras que los servicios de seguridad obtienen el 31%.

Asimismo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) advirtió en agosto que Somalia se encuentra «al borde de una catástrofe humanitaria». Las crisis superpuestas vinculadas con la conflictividad armada, el cambio climático, la pandemia de la COVID-19 y la inestabilidad política han generado que una de cada cuatro personas



ÁFRICA SUBSAHARIANA

se enfrente a altos niveles de inseguridad alimentaria, y que más de 800.000 niños y niñas menores de cinco años estén en riesgo de desnutrición aguda. Finalmente, a principios de agosto, dos informes presentados por el Secretario General de la ONU denunciaron el alarmante incremento de episodios de violencia sexual en el país en el último año. Los informes documentaron que en 2020 un total 400 civiles, principalmente niñas, fueron víctimas de violación y otras formas de violencia sexual en Somalia, lo cual representa un aumento de casi el 80% en comparación con 2019. El incremento se debe al empeoramiento de las condiciones de inseguridad imperantes en Somalia, marcado por las tensiones políticas en el período pre electoral; el aumento de enfrentamientos intercomunitarios; las acciones de Al-Shabaab, que se intensificaron durante la pandemia de la COVID-19. Según el informe, los casos de violencia sexual atribuidos a Al-Shabaab se han duplicado, así como las violaciones perpetradas por milicias de clanes, que también se han casi triplicado durante el último año. En la gran mayoría de los casos, los culpables permanecen sin identificar, lo que perpetúa el ciclo de impunidad. Asimismo, los textos también expresaron su preocupación por el hecho de que más del 15% de los casos de violencia sexual verificados se atribuyeran a las fuerzas de seguridad del Gobierno (Ejército y Policía), así como también las fuerzas regionales desplegadas en el país cometieron actos de violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niños.

4

- UN News, “[Somalia: Call for Urgent Action Following ‘Alarming’ 80 per Cent Rise in Sexual Violence](#)”, *UN News*, 5 de agosto de 2021.
- Mohammed Yusuf, “[COVID Pandemic Exposes Somalia’s Weak Health Care System](#)”, *VOA*, 18 de agosto de 2021.
- Moulid Hujale y Lizzy Davies, “[‘Nothing to Eat’: Somalia Hit by Triple Threat of Climate Crisis, COVID and Conflict](#)”, *The Guardian*, 23 de agosto de 2021.

SUDÁN DEL SUR

Naciones Unidas y voces expertas advierten sobre los altos niveles de violencia y la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en el país

En el décimo aniversario de la independencia de Sudán del Sur, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) alertó del deterioro de las condiciones humanitarias en el país debido a los efectos combinados de las inundaciones, la violencia, la inseguridad alimentaria y el impacto de la pandemia de la COVID-19, registrando en el mes de agosto al menos 380.000 nuevos desplazamientos forzados. A pesar de la firma del acuerdo de paz

revitalizado en 2018 y la conformación del gobierno de unidad, los niveles de inseguridad y violencia se siguen manteniendo en un conflicto armado que ha dejado un estimado de 400.000 víctimas mortales desde su inicio en diciembre de 2013. Según datos del Africa Center for Strategic Studies, los registros de episodios violentos contabilizados en los que va de año superan a los del 2020 o 2019. Esta situación está generando múltiples impactos en la población, deteriorando sus condiciones de vida. Más de un tercio de la población (aproximadamente cuatro millones de personas) se encuentran actualmente desplazadas por la violencia, siendo la mayoría personas refugiadas (2,3 millones). Este hecho convierte a Sudán del Sur en el país africano que posee una mayor proporción de ciudadanos que viven como refugiados en otros estados.

Por otro lado, el país está experimentando su peor crisis alimentaria desde la independencia. Más de 6,5 millones de personas (el 63% de la población total) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda y alrededor de 100.000 se enfrentan a una situación crítica de hambruna. Estos altos niveles de inseguridad alimentaria son una consecuencia directa de la violencia política, que han hecho que la población pierda el acceso a los medios de vida (siembra, cosecha, transporte de alimentos, funcionamiento de los mercados, ganado), y también se han visto influidos por las fuertes inundaciones, el impacto de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y la recesión económica, influenciada a su vez por la pandemia. En este último aspecto, según el Banco Mundial, las previsiones de la economía nacional es que se contraiga un 4,1% en 2021, lo cual seguirá erosionando el poder adquisitivo de las personas. A todo lo anterior, además, se añade la alarmante situación de los derechos humanos en el país, según denuncia un reciente informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur. En él se denuncia que nueve de los 10 estados que conforman el país están inmersos en lo que la Comisión de la ONU denomina “niveles alarmantes de conflicto”, en donde se documenta la prevalencia de desapariciones forzadas, tortura, violación y violencia sexual relacionada con el conflicto o el reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados en todo el país.

- Lisa Schlein, “[UN: South Sudan Suffering Human Rights Crisis of Epic Proportions](#)”, *VOA*, 23 de septiembre de 2021.
- The East African, “[380,000 People Displaced by Floods and Violence in South Sudan: UN](#)”, *The East African*, 15 de septiembre de 2021.
- Africa Center for Strategic Studies, “[10 Years after Independence South Sudan Faces Persistent Crisis](#)”, 13 de septiembre de 2021.



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

ARGELIA – MARRUECOS: Argel rompe relaciones diplomáticas con Rabat en medio de crecientes tensiones bilaterales

EGIPTO: Alertan sobre vulneraciones a los derechos humanos en el país y sobre los riesgos añadidos de las detenciones arbitrarias en contexto de pandemia

IRÁN: Nuevo presidente asume su mandato con el control del coronavirus como prioridad

IRAQ: El país afronta elecciones anticipadas en un clima de escepticismo y de crisis económica y social acentuada por la COVID-19

SÁHARA OCCIDENTAL - MARRUECOS: Corte de Justicia de la Unión Europea anula el acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos por incluir recursos del Sáhara Occidental

TÚNEZ: Se agudiza la crisis política en el país tras la decisión del presidente de suspender el Parlamento y concentrar poderes

ARGELIA – MARRUECOS

Argel rompe relaciones diplomáticas con Rabat en medio de crecientes tensiones bilaterales

En un escenario de crecientes tensiones bilaterales, Argelia anunció a finales de agosto la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos aduciendo repetidos “actos hostiles” del país vecino. Las autoridades argelinas justificaron su decisión en las políticas marroquíes de hechos consumados en el Sáhara Occidental, pero también apuntaron a otros temas. Entre ellos, el llamamiento de Rabat en Naciones Unidas a la independencia de pueblos de la región argelina de Kabylia. Argel acusó al reino alauí de dar apoyo al Movimiento por la Autodeterminación de Kabylia (MAK) y a RACHAD, dos organizaciones catalogadas por Argelia como terroristas y a las que atribuyó el origen de los incendios que causaron la muerte a más de 90 personas en esta región en julio, insinuando por tanto una posible complicidad de Rabat. Las relaciones bilaterales también se habían tensionado en los últimos meses tras la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel y, en particular en julio, a causa del llamado “escándalo Pegasus” debido a las revelaciones respecto a que Marruecos habría utilizado el programa de espionaje israelí para acceder a las comunicaciones de más de 6.000 nacionales argelinos, entre ellos altos cargos políticos y militares. Marruecos desestimó los argumentos argelinos y reaccionó ante la ruptura de relaciones diplomáticas calificando la decisión de injustificada, pero predecible. La prensa oficial marroquí consideró que la decisión de Argel pretendía desviar la atención de sus problemas internos, en particular de la crisis política, económica y social acentuada por la pandemia de la COVID-19 y por una

sequía que está afectando seriamente el suministro de agua en el país. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, las autoridades argelinas subrayaron la necesidad de intensificar la vigilancia de la frontera occidental y, en septiembre, anunciaron el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves marroquíes, tanto civiles como militares. La crisis entre Marruecos y Argelia ha sido considerada por algunos analistas y observadores como la más grave desde el cierre de las fronteras terrestres entre ambos países en 1994.

- Africanews y AFP, [“Rising diplomatic tension between Algeria and Morocco”](#), *Africanews*, 25 de agosto de 2021.
- Al Jazeera, [“Algeria closes airspace to all Moroccan planes”](#), *Al Jazeera*, 22 de septiembre de 2021.
- Farid Alilat, [“Maroc-Algérie: une crise de trente ans”](#), *Jeuneafrique*, 25 de agosto de 2021.
- Ricard González, [“Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos”](#), *El País*, 24 de agosto de 2021.

EGIPTO

Alertan sobre vulneraciones a los derechos humanos en el país y sobre los riesgos añadidos de las detenciones arbitrarias en contexto de pandemia

Diversas ONG y voces expertas de Naciones Unidas advirtieron sobre graves vulneraciones a los derechos humanos en Egipto, alertando sobre ejecuciones extrajudiciales, persecución y acoso a activistas y detenciones arbitrarias en condiciones que incrementan los riesgos de contagio de COVID-19. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch (HRW) hicieron llamamientos a investigar las evidencias sobre ejecuciones extrajudiciales de decenas de personas



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

acusadas de “terrorismo” en el marco del conflicto armado que afecta a la Provincia de Sinaí. Un informe de HRW publicado en septiembre subrayó que las autoridades egipcias disfrazan estos casos en sus recuentos sobre “tiroteos” y documentó ejemplos de personas ejecutadas mientras estaban en custodia o en situaciones en las que no representaban un peligro inminente. A principios de agosto las propias Fuerzas Armadas egipcias informaron que habían dado muerte a 89 presuntos militantes de ISIS en una operación militar y presentaron un video que registra la muerte de dos personas desarmadas. Amnistía Internacional también presentó un informe en el que acusó a la Agencia de Seguridad Nacional de acoso e intimidaciones a personas defensoras de los derechos humanos para silenciarlas y torpedear su trabajo y activismo político. Entre los casos analizados se cuenta el de Ahmed Samir Santawy, condenado a cuatro años por difusión de “noticias falsas” por publicaciones críticas de la situación de derechos humanos en las prisiones egipcias y de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades.

Personas expertas de Naciones Unidas también denunciaron torturas, detenciones y arrestos de defensoras y defensores de derechos humanos en Egipto, subrayando que las prolongadas detenciones prejudiciales a las que eran sometidas suponían una exposición grave e innecesaria a la COVID-19. En esta línea, se denunció la escasez de datos estadísticos sobre las muertes a causa de la pandemia en las prisiones egipcias. Diversas voces también han llamado la atención sobre el lento ritmo de vacunación y la falta de transparencia en los planes de respuesta a la pandemia por parte del Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi. Según informaciones de prensa, al mes de septiembre solo un 6% de la población había recibido una vacuna. Ante las reiteradas denuncias en materia de derechos humanos en Egipto diversas voces exigieron la suspensión de las transferencias de armas al país y la imposición de sanciones a las agencias de seguridad y altos cargos responsables de los abusos. En septiembre el Gobierno de EEUU decidió suspender, pero solo parcialmente, la ayuda militar a Egipto, transfiriendo más de la mitad de los fondos comprometidos –170 millones de dólares– con la condición de que fueran utilizados para actividades de contraterrorismo, control de fronteras y no proliferación. Otros 130 millones quedaron bloqueados a la espera de respuesta de requerimientos en materia de derechos humanos. La medida generó decepción y críticas entre activistas de derechos humanos, que la consideraron más simbólica que sustantiva. Tres días antes del anuncio de EEUU, el Gobierno de al-Sisi anunció una nueva estrategia de derechos humanos en aparente respuesta a las presiones internacionales en este ámbito. El plan también fue recibido con escepticismo por defensores de derechos humanos.

- Amnesty International, Egypt: *“This will only end when you die”*: National Security Agency harassment of activists in Egypt, 16 de septiembre 2021.
- Elizabeth Hagerdon, Biden move on Egypt aid slammed by human rights groups, Al-Monitor, 14 de septiembre de 2021.
- Human Rights Watch, *Egypt: ‘Shootouts’ Disguise Apparent Extrajudicial Executions*, HRW, 7 de septiembre 2021.
- Mona el-Naggar y Lara Jakes, “U.S. and Egypt Put Improving Egypt’s Human Rights on the Agenda”, *The New York Times*, 16 de septiembre 2021.
- UN OHCHR, *Imprisoned human rights defenders in Egypt at grave risk of COVID-19, say UN human rights experts*, 24 de agosto 2021.

IRÁN

Nuevo presidente asume su mandato con el control del coronavirus como prioridad

El dirigente ultraconservador Ebrahim Raisi asumió a principios de agosto como nuevo presidente de la república islámica con el control de la pandemia de la COVID-19 como una de sus principales prioridades. El mandatario subrayó que la primera tarea de su gobierno –con un gabinete integrado solo por hombres– sería la respuesta al coronavirus, la mejora de la situación de salud y la ampliación de la vacunación; seguida de la economía. El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, también destacó en agosto que la pandemia era el primer problema del país, después de que la cifra de muertes por COVID-19 superara las 100.000 personas desde febrero de 2020. Informaciones de prensa indicaron que el nuevo Gobierno afrontaba demandas para aceptar vacunas occidentales. Hasta el momento, sus principales proveedores de vacunas han sido China y Rusia. Organizaciones de derechos humanos y sectores críticos han puesto en cuestión la falta de transparencia y problemas en la gestión de la pandemia. En este contexto, Raisi aprovechó su primera comparecencia en la Asamblea General de Naciones Unidas para criticar las políticas de EEUU y, en especial, las sanciones impuestas a Irán, asegurando que en un contexto de pandemia estas medidas constituían crímenes contra la humanidad. El mandatario ha expresado su disposición a reanudar las negociaciones sobre la cuestión nuclear, suspendidas por el contexto electoral en Irán, pero al finalizar septiembre el proceso permanecía estancado. El gobierno de Joe Biden ha planteado que EEUU está dispuesto a retornar al acuerdo nuclear –JCPOA por sus siglas en inglés, del que Washington se retiró en 2018 bajo el mandato de Donald Trump– si Teherán cumple con todas las condiciones establecidas en el pacto y ha anunciado que podría levantar las sanciones



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

económicas vinculadas al tema atómico, pero no a las relacionadas con los abusos a los derechos humanos.

- AFP, “Iran President Says His Proposed Cabinet Will Focus on Coronavirus, Economy”, *AFP*, 21 de agosto de 2021.
- Aya Batrawy, “Iran’s president slams US in first speech to UN as leader”, *AP*, 22 de septiembre de 2021.
- Patrick Wintour, “Iranian government urged to accept western vaccines amid deadly Covid wave”, *The Guardian*, 23 de agosto de 2021.; “Iran’s president denounces US sanctions as ‘crimes against humanity’”, *The Guardian*, 21 de septiembre de 2021.

IRAQ

El país afronta elecciones anticipadas en un clima de escepticismo y de crisis económica y social acentuada por la COVID-19

En cumplimiento de las promesas hechas por el primer ministro Mustafá al-Khadimi al asumir su mandato en mayo de 2020, Iraq celebra el 10 de octubre elecciones parlamentarias anticipadas. Según el calendario definido en la Constitución los comicios debían celebrarse en 2022, pero el adelanto electoral fue uno de los compromisos de al-Khadimi en respuesta a las masivas manifestaciones populares que en 2019 sacudieron al país denunciando la corrupción, las carencias en los servicios públicos y los abusos de la élite, y que derivaron en la caída del anterior gobierno iraquí. En vísperas de la elección –la quinta desde la invasión estadounidense que derrocó al régimen de Saddam Hussein en 2003–, el clima general estaba impregnado por el escepticismo y la desilusión en muchos sectores y por los llamamientos de algunos partidos de la oposición a boicotear los comicios. Grupos políticos de la mayoría shíi aparecen con posibilidades de continuar como la principal fuerza política, aunque existen divisiones entre las formaciones shíies en temas relevantes como la influencia iraní en Iraq. Asimismo, los activistas que promulgaban la salida de la clase política dominante estaban divididos sobre la conveniencia o no de participar en la votación y medios de prensa informaron sobre crecientes llamamientos a boicotear los comicios, sobre todo entre los jóvenes. A esto se suman las informaciones sobre el clima de apatía y el escaso seguimiento a la campaña electoral, ya que parte importante de la población está preocupada principalmente por la situación económica, afectada seriamente por la caída en los precios del petróleo y por la pandemia. En este escenario, algunos analistas advertían sobre el riesgo de que amplios sectores de la población iraquí perciban el conjunto del

sistema político del país como ilegítimo. Un punto a destacar de las elecciones es que se celebrarán en el marco de una nueva ley electoral, que garantiza que 83 de los 329 escaños serán ocupados por mujeres.

- AFP, “‘Apathy and despair’ as Iraq looks to October election”, *France24*, 20 de septiembre de 2021.
- Nussaibah Yunis, *Iraq’s parliamentary election will produce more of the same*, European Council on Foreign Relations, 4 de octubre de 2021.
- Reuters, “Factbox: Who’s competing in Iraq’s elections?”, Reuters, 28 de septiembre de 2021.
- The Arab Weekly, “EU, UN plan to monitor Iraq elections amid fears of voter fraud”, *The Arab Weekly*, 7 de septiembre de 2021.

SÁHARA OCCIDENTAL - MARRUECOS

Corte de Justicia de la Unión Europea anula el acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos por incluir recursos del Sáhara Occidental

La Corte de Justicia de la Unión Europea decidió anular a finales de septiembre el acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos por incluir la exportación de recursos procedentes del Sáhara Occidental. La decisión fue considerada como un triunfo para las demandas del Frente POLISARIO, aunque el acuerdo se mantendrá temporalmente, ya que el tribunal consideró que su anulación inmediata podría tener efectos nocivos para los intereses de la UE y crear inseguridad jurídica. En 2016 y 2018 la corte ha emitido veredictos similares. En otro hecho vinculado a la cuestión del Sáhara Occidental, cabe destacar que durante agosto Sierra Leona inauguró un consulado en la ciudad de Dakhla, sumándose a la decena de países africanos que han abierto una oficina diplomática en el territorio saharauí controlado por Marruecos en el último año y reforzando así la política de hechos consumados de Rabat. Finalmente, cabe mencionar que en los últimos meses se han registrado avances hacia la designación de un nuevo enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental tras dos años de bloqueo. A mediados de septiembre las autoridades marroquíes confirmaron su aceptación para el cargo del diplomático sueco-italiano Staffan de Mistura. El Frente POLISARIO ya había accedido en mayo a la posible nominación de Staffan de Mistura, quien previamente se ha desempeñado como representante especial del secretario general de la ONU en Iraq (2007-2009) y en Afganistán (2010-2011), y como enviado especial de la ONU para Siria (2014-2018). La designación del diplomático, anunciada formalmente en los primeros días de octubre, permitirá ocupar un puesto vacante desde 2019 y, eventualmente, reactivar un proceso negociador.



MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

- Jennifer Rankin, [“European court annuls EU trade and fishing deals with Morocco”](#), *The Guardian*, 29 de septiembre de 2021.
- Middle East Monitor, [Morocco backs de Mistura as UN envoy for Western Sahara](#), MEMO, 16 de septiembre de 2021.

TÚNEZ

Se agudiza la crisis política en el país tras la decisión del presidente de suspender el Parlamento y concentrar poderes

La crisis política en Túnez, considerada como la más grave desde 2011, se intensifica en los meses de agosto y septiembre ante la decisión del presidente de adoptar nuevas medidas para concentrar poderes, alentando el rechazo de un número creciente de actores políticos y sociales. La crisis estalló a finales de julio, cuando el mandatario Kais Saied resolvió destituir al primer ministro, suspender el Parlamento y arrogarse poderes ejecutivos adicionales argumentando una situación de emergencia nacional. La decisión presidencial se produjo en un contexto de movilizaciones y descontento popular por el bloqueo político y la deteriorada situación económica y social, agravada por la pandemia. El país presenta una de las peores tasas de mortalidad por COVID-19 del continente africano, unas bajísimas tasas de vacunación –solo 7% de población al mes de julio–, y la enfermedad también ha puesto al límite las infraestructuras de salud y la industria turística, clave para la economía tunecina. El presidente, una figura independiente de partidos y que ha mantenido un intenso pulso con el primer ministro, ha asegurado que su intención es relanzar la revolución. Las decisiones adoptadas en julio por Saied recibieron respaldo de algunos sectores, aunque otros –incluyendo sectores críticos con las autoridades y la clase dirigente– expresaron sus reticencias por el método escogido por el mandatario y sus repercusiones en los avances obtenidos tras la revolución tunecina. Otros sectores, entre ellos el partido islamista Ennahda, denunciaron las medidas como un retroceso democrático y las calificaron como un golpe de Estado. En las semanas siguientes, se informó de numerosas destituciones de altos cargos, de la persecución a fiscales y jueces y de la prohibición de viajar al extranjero impuesta a altos funcionarios. En este contexto, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y analistas subrayaron la preocupación por la deriva autocrática en el país.

En septiembre, el presidente decidió reforzar aún más sus poderes, anunciando medidas para gobernar por decreto durante un período excepcional de plazo indefinido, designar el nuevo gabinete y suspender las cláusulas constitucionales que limitan sus nuevos poderes. Además, adelantó su intención de crear

un comité, supervisado por él mismo, para promover un cambio en la Constitución de 2014 con el fin de modificar el sistema político vigente. Progresivamente, el mandatario ha recibido crecientes presiones por parte de actores locales e internacionales. A nivel local, la oposición a Saied se ha ampliado e intensificado. A mediados de septiembre se iniciaron manifestaciones populares contra el mandatario, la más masiva a finales de mes, que exigieron su renuncia. La agrupación sindical UGTT, actor clave en Túnez e involucrada en el pasado en iniciativas de diálogo político y social, exigió la convocatoria de elecciones legislativas para que sea un nuevo Parlamento el que defina las posibles reformas constitucionales. La mayor parte de los partidos con representación parlamentaria y también la UGTT han expresado su oposición a las medidas anunciadas por Saied, advirtiendo sobre la vulneración de la Constitución por parte del presidente y sobre su pérdida de legitimidad. La situación también provocó una crisis en Ennahda, ya que un centenar de parlamentarios renunciaron a su militancia aduciendo la incapacidad de la formación para hacer frente a Saied. A finales de septiembre el partido islamista propuso reanudar la actividad parlamentaria, en desafío a la decisión presidencial de cerrar el Parlamento. A nivel internacional, países como Egipto expresaron su apoyo al presidente tunecino, pero otros actores –entre ellos los países del G7– instaron a Saied a retornar al orden constitucional. En este contexto, a finales de septiembre se anunció la designación de Najla Bouden Romdhane, una geofísica sin perfil político previo, como primera ministra de Túnez, la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo. Diversos análisis expresaron sus dudas sobre el margen de maniobra de la primera ministra teniendo en cuenta los amplios poderes que se ha atribuido Saied en los últimos meses.

- Amna Guellali (Amnesty International), [“Tunisie: ‘Le charcutage de la Constitution représente une menace pour les droits humains’”](#), *Le Monde*, 28 de septiembre de 2021.
- Jihed Abidellaoui, [“Tunisia’s first woman prime minister raises spirits despite power grab”](#), *Reuters*, 30 de septiembre de 2021.
- Martin Chulov y Simon Speakman, [“Tunisia in turmoil as president purges officials and seizes judicial power”](#), *The Guardian*, 28 de julio de 2021.
- Reuters, [“Tunisia’s president to ignore parts of the constitution and rule by decree”](#), *The Guardian*, 22 de septiembre de 2021.
- Reuters, [“Tunisian Ennahda party asks parliamentary speaker to resume assembly’s work”](#), *Reuters*, 29 de septiembre de 2021.
- Tarek Amara, [“Tunisians protest against president’s power grab as opposition deepens”](#), *Reuters*, 26 de septiembre de 2021.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

COLOMBIA: Naciones Unidas advierte que casi 300 ex combatientes de las FARC han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz

COLOMBIA: La oposición pide a la Corte Penal Internacional que investigue al Estado colombiano por su gestión de las protestas que se iniciaron a finales de abril

EL SALVADOR: El Gobierno señala que el número de homicidios y de pandilleros encarcelados se ha reducido notablemente respecto del periodo más restrictivo de gestión de la pandemia

GUATEMALA: Los homicidios y la violencia contra las mujeres se incrementan en 2021

HONDURAS: Aumentan los homicidios en 2021

MÉXICO: A pesar de la pandemia, en 2020 se registró la misma tasa de homicidios de años anteriores

NICARAGUA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Gobierno a cesar su intimidación contra el personal médico y científico crítico con la gestión de la pandemia

COLOMBIA

Naciones Unidas advierte que casi 300 ex combatientes de las FARC han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz

Naciones Unidas advierte que 292 excombatientes (283 hombres y nueve mujeres) del antiguo grupo armado de oposición FARC han sido asesinados en Colombia tras la firma del acuerdo de paz (septiembre de 2016) y su proceso de desarme y desmovilización. En este sentido, el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre la implementación del acuerdo de paz advierte sobre un importante deterioro de la situación de seguridad para las personas en proceso de desmovilización (unas 13.000, 7.000 de las cuales excombatientes), especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que concentran más de un tercio del total de los asesinatos. Así las cosas, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó al Gobierno a acelerar el acceso de los excombatientes a la tierra y vivienda para garantizar entornos más seguros en los procesos de reincorporación individual y colectiva. Por otra parte, el informe también señala un incremento en el número de asesinatos de defensores de derechos humanos este año. Así, en 2021 se han registrado 158 asesinatos, de los que 53 están verificados, 37 están en proceso de verificación y 68 son no concluyentes o no verificables. Según Naciones Unidas, algunos de los motivos que explican el mencionado deterioro de la seguridad y de la violencia contra excombatientes o defensores de derechos humanos son el incremento de las disputas entre grupos armados ilegales, especialmente vinculadas al control del territorio, de los cultivos

ilícitos o de las rutas estratégicas de narcotráfico. Entre dichos grupos, Naciones Unidas menciona a las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocidas también como “Clan del Golfo”). En este sentido, a finales de septiembre la Policía aseguró que algunos de los líderes del grupo armado “Segunda Marquetalia” (disidencia de las FARC que reanudó la lucha armada en 2019) mantienen contacto con cárteles mexicanos en Venezuela. En el mes de agosto, el Gobierno anunció haber abortado un ataque por parte de Segunda Marquetalia en Bogotá, deteniendo a dos personas e incautando material explosivo. A finales de septiembre, cinco personas habrían sido asesinadas por dicho grupo en el departamento de Nariño, y poco después el Ejecutivo declaró que 10 antiguos combatientes de las FARC habrían muerto a manos de las Fuerzas Armadas en el departamento de Guainía. También cabe destacar la muerte de cinco soldados tras un ataque explosivo por parte del ELN en el departamento de Arauca a mediados de septiembre, o los graves enfrentamientos entre dicho grupo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el departamento de Chocó también a mediados de mes.

- Semana, “[ONU: casi 300 excombatientes de FARC han sido asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz](#)”, *Semana*, 1 de octubre de 2021.
- France24, [Casi 300 excombatientes de FARC han sido asesinados tras dejar las armas en Colombia \(ONU\)](#), *France24*, 2 de octubre de 2021.
- ONU Noticias, [Colombia a cinco años del Acuerdo de Paz: Pese a los avances, la violencia sigue siendo un gran desafío](#), *ONU Noticias*, 30 de septiembre de 2021.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

- Europa Press, [La Policía de Colombia asegura que disidencias de las FARC se reúnen con narcotraficantes mexicanos en Venezuela](#), *Europa Press*, 2 de octubre de 2021.

COLOMBIA

La oposición pide a la Corte Penal Internacional que investigue al Estado colombiano por su gestión de las protestas que se iniciaron a finales de abril

Se registran varios disturbios y enfrentamientos entre la Policía y decenas de manifestantes durante la reanudación de las protestas que se iniciaron a finales de abril contra la reforma fiscal y otras políticas gubernamentales (como la gestión de la pandemia), y que hasta finales de septiembre se habían mantenido activas de manera discontinua. Desde entonces, unas 70 personas han fallecido, aunque algunas organizaciones elevan tal cifra hasta casi 90. En este sentido, a finales de septiembre un senador del Polo Democrático (partido de la oposición) anunció el envío a la Corte Penal Internacional de un informe sobre los presuntos abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el inicio de las protestas. En tal informe se denuncian, entre otras cuestiones, el retraso en el inicio de investigaciones, la falta de imparcialidad en los procesos ya iniciados, la intimidación a víctimas y sus familiares o la persecución contra organizaciones de la sociedad civil que alientan la movilización ciudadana. El informe reporta episodios de tortura, retención ilegal, violencia sexual, homicidio, agresión física o desaparición forzada. Esta es la tercera denuncia que partidos de la oposición u organizaciones de derechos humanos envían a la CPI. En esta última denuncia, el Polo Democrático considera que el Estado colombiano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad y que la Fiscalía General de la Nación sigue una estrategia de ocultamiento, por lo que insta a la CPI a solicitar información sobre los delitos que se reportan en el informe a las autoridades competentes.

- Europa Press, [La oposición colombiana denuncia ante el TPI la “impunidad” de la violencia estatal durante las protestas](#), *Europa Press*, 28 de septiembre de 2021.
- TeleSur, [Avanzan las manifestaciones del Paro Nacional en Colombia](#), *TeleSur*, 28 de septiembre de 2021.
- Europa Press, [Una nueva jornada de protestas en Colombia concluye con disturbios y enfrentamientos con la Policía en Bogotá](#), *Europa Press*, 29 de septiembre de 2021.

EL SALVADOR

El Gobierno señala que el número de homicidios y de pandilleros encarcelados se ha reducido notablemente respecto del periodo más restrictivo de gestión de la pandemia

El Gobierno señala que entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2021 el número de homicidios se ha reducido en 12,5% respecto del mismo número de muertes en el año anterior. Aunque en los primeros siete meses del año se había registrado un incremento en el número de asesinatos respecto al año anterior, el Gobierno señaló que el descenso global en los nueve primeros meses del año se debe principalmente al mayor despliegue militar ordenado por el Ejecutivo en el marco del llamado Plan Control Territorial. Según datos públicos, el número de feminicidios entre enero y agosto de 2021 se incrementó en un 15,5% respecto del mismo período del año anterior.

Por otra parte, según datos de la Policía, el número de personas pertenecientes a maras detenidas se ha reducido notablemente desde el año 2017, especialmente desde la toma de posesión del cargo del actual presidente, Nayib Bukele. Así, en 2017 se detuvo a unas 20.300 personas que integraban dichas pandillas, según la Policía, cifra que se redujo a 15.200 en 2018, 15.200 en 2019 y 10.400 en 2020. En 2021, hasta mediados de agosto se había detenido a 5.712 personas, lo cual arroja una proyección de unas 9.100 personas en todo el 2021, menos de la mitad que en 2017. El número de personas encarceladas no pertenecientes a maras también disminuyó claramente en dicho periodo (un 26%), pero tal descenso es mucho más claro en el caso de personas pandilleras, especialmente de miembros de la Mara Salvatrucha. El Gobierno sostiene que el descenso en el número de encarcelamientos responde al debilitamiento de las estructuras de las maras que estarían provocando las políticas del Gobierno sobre seguridad ciudadana, mientras que otras voces sugieren que la disminución en el número de detenciones de pandilleros responde a los acuerdos no públicos entre el Gobierno y algunas de estas pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, para reducir los niveles de violencia en el país.

- Swissinfo, [Homicidios caen 12,5 % en El Salvador por despliegue militar, según ministro](#), *Swissinfo*, 21 de septiembre de 2021.
- EFE, [Se reducen homicidios en El Salvador en comparación con el 2020](#), *EFE*, 21 de septiembre de 2021.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

GUATEMALA

Los homicidios y la violencia contra las mujeres se incrementan en 2021

La ONG Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN) señala que en los primeros ocho meses de 2021 ha habido un incremento en el número de homicidios y de otras formas de criminalidad como robos de vehículos y extorsiones. CIEN, utilizando datos oficiales de la Policía, señala que el incremento de homicidios ha sido de un 8% en relación al mismo período el año pasado. Sin embargo, si se comparan los datos de 2021 con los de 2019, la reducción en el número de homicidios es del 27%. Según CIEN, el departamento de Guatemala (que incluye la capital del país) registró en mayor número de homicidios, con un incremento del 30% respecto del año anterior. Estos datos concuerdan con las voces que sostienen que las medidas vinculadas al control de la pandemia de la COVID-19 habrían provocado un descenso en el número y la tasa de homicidios en la región. En la última década, en Guatemala se han registrado alrededor de 60.000 homicidios, siendo uno de los países del mundo con una tasa de homicidios más alta. Por otra parte, la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) publicó un informe en el que señala que en los siete primeros meses de 2021 el número de homicidios se ha incrementado en un 18% respecto del mismo período en 2020. De las 2.256 muertes violentas registradas en 2021, 1.902 eran hombres y 354 mujeres. Según GAM, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en el país es de 26, y el departamento con una mayor incidencia de asesinatos Zacapa. La ONG también destacó durante el 2021 se ha registrado un notable incremento en la violencia contra las mujeres. Así, según datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, hasta el 1 agosto se habían registrado 58.975 víctimas, 3.199 más que en el mismo período del año anterior. Finalmente, cabe señalar que un informe del centro Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala advirtió que en 2020 el 89% de los homicidios en el país quedaron en la impunidad.

- Swissinfo, [Los asesinatos en Guatemala suben un 7 % en ocho meses de 2021](#), *Swissinfo*, 10 de septiembre de 2021.
- DW, [Guatemala registra aumento de homicidios durante 2021](#), *DW*, 23 de septiembre de 2021.
- Swissinfo, [Guatemala registra un aumento de homicidios, extorsiones y robos durante 2021](#), *Swissinfo*, 22 de septiembre de 2021.

HONDURAS

Aumentan los homicidios en 2021

El Gobierno declara que en los siete primeros meses del 2021 el número de homicidios en el país se ha incrementado en un 13% respecto del mismo período en el año anterior. En 2020 se registraron en Honduras 3.496 homicidios, un 14,3% menos que en 2019. Entonces el Gobierno y varios de centros de análisis sostuvieron que este descenso estaba vinculado a las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19, de modo que, según estos mismos análisis, entraría dentro de lo razonable que las tasas de homicidios volvieran a incrementarse a medida que las mencionadas medidas restrictivas se van flexibilizando. En una secuencia histórica más amplia, el número de homicidios en el país ha disminuido claramente desde que en el año 2012 se convirtiera en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo (85,5). Así, en 2019 esta se situó en los 44,2 homicidios cada 100.000 habitantes y en 2020 en los 37. Según algunas organizaciones de derechos humanos, el 65% de las muertes violentas en Honduras están vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, y el 90% de los homicidios en el país permanecen en la impunidad. Por su parte, el Gobierno también vincula los altos niveles de violencia en el país con la actividad de las denominadas maras. También cabe destacar la publicación de un informe por parte del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (OV-UNAH) en el que se advierte de que hasta finales de septiembre de 2021 se habían registrado en Honduras 36 homicidios múltiples o masacres en los que murieron 126 personas, 19 mujeres entre ellas. Por otra parte, el Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh) denunció que en 2021 más de 200 mujeres han sido asesinadas, advirtiendo sobre la tendencia al alza en este crimen.

- Swissinfo, [Honduras registra un aumento de 13 % en los homicidios en 7 meses de 2021](#), *Swissinfo*, 4 de agosto de 2021.
- EFE, [Denuncian la muerte de más de 200 mujeres en Honduras y piden frenar la violencia](#), *EFE*, 21 de septiembre de 2021.
- Proceso Digital, [Honduras registra 36 masacres; 126 muertos, 19 de ellos mujeres: OV-UNAH](#), *Proceso Digital*, 20 de septiembre de 2021.



MESOAMÉRICA Y REGIÓN ANDINA

MÉXICO

A pesar de la pandemia, en 2020 se registró la misma tasa de homicidios de años anteriores

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en 2020 en México se registraron 36.579 asesinatos, una cifra prácticamente igual a la del año anterior, con una tasa de 29 homicidios cada 100.000 habitantes (la misma que en 2018 y 2019). Esta tasa es la más alta de la historia del país desde que se tienen registros sobre la materia. En 1990 la tasa de homicidios era de 17, y esta descendió hasta los 8 en el año 2007. Tras el inicio de la llamada guerra contra las drogas por parte de Felipe Calderón, la tasa de homicidios se incrementó drásticamente hasta alcanzar los 24. Tras un marcado descenso hasta el año 2014, la tasa de homicidios volvió a escalar nuevamente de manera notable hasta el año 2018, manteniéndose estable desde entonces en los 29 asesinatos cada 100.000 habitantes. La evolución de los homicidios en México contrasta con la que ha seguido en otras regiones, como en Centroamérica, donde se observó un descenso de los niveles de violencia y criminalidad durante los meses en los que se instauraron medidas más drásticas de contención de la pandemia. Los estados con mayor número de homicidios fueron Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Sonora y Guerrero. Los estados con mayor tasa de homicidios son Colima (95), Chihuahua (92), Guanajuato (87), Baja California (78) y Zacatecas (76). En algunos de estos estados el incremento de la tasa de homicidios desde el año 2009 ha sido muy drástica. En Guanajuato pasó de nueve a 88 (un incremento del 866%), en Colima de diez a 95 (incremento del 850%) y en Zacatecas de nueve a 76 (incremento del 744%). Según algunos analistas, prácticamente la mitad de los homicidios que se registran en el país se deben a los enfrentamientos entre tres de los principales cárteles del país: el de Sinaloa, el del Noreste y el del Jalisco Nueva Generación. Si bien la mayor parte de los enfrentamientos entre cárteles se debe al control de territorios y rutas vinculadas al narcotráfico, en estados como el de Guanajuato tiene una importancia creciente el robo de hidrocarburos. Del total de 36.579 asesinatos, 3.952 víctimas fueron mujeres y 32.147 hombres. El 68% de dichos asesinatos se produjo con arma de fuego.

- Rafael López, [En 2020, se cometieron más de 36 mil homicidios dolosos en México: Inegi, Milenio](#), 27 de julio de 2021.
- Clara Cepeda, [En 2020, más de 36 mil homicidios en México: Inegi, La Jornada](#), 27 de julio de 2021.
- Pablo Ferri, [México mantuvo durante 2020 una elevada cifra de asesinatos pese a la pandemia, El País](#), 27 de julio de 2021.

NICARAGUA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Gobierno a cesar su intimidación contra el personal médico y científico crítico con la gestión de la pandemia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA, perteneciente a la CIDH) condenan el hostigamiento e intimidación contra personal médico, de la comunidad científica y activistas de la salud. Ambos organismos han asegurado haber recibido denuncias de acoso e intimidación contra entidades como La Unidad Médica Nicaragüense, el Observatorio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Interdisciplinario. REDESCA señala que desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales en 2018, la CIDH ha registrado más de 400 despidos de personal médico por ejercer su profesión o bien por mantener una actitud crítica con el Gobierno. Algunos otros profesionales han decidido abandonar el país por los mismos motivos. Recientemente, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, acusó a algunos médicos y científicos de hacer “terrorismo sanitario” al informar sobre la propagación de la pandemia. Así, según el Observatorio Ciudadano COVID-19, el número de muertes reales por COVID-19 es cuatro veces superior a los datos oficiales del Gobierno. Según dicha entidad, solamente en la primera semana de septiembre se registraron 1.865 casos de coronavirus y 329 fallecimientos por COVID-19. Tanto el Observatorio Ciudadano COVID-19 como otros colectivos de la salud han instado a la población a llevar a cabo una cuarentena voluntaria para frenar la propagación de la llamada variante delta, y a la vez han acusado al Gobierno de fomentar una falsa sensación de normalidad entre la ciudadanía y de alentar concentraciones masivas, a pesar de las indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud. En esta misma línea, a mediados de septiembre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno a cesar su persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, mientras que en las mismas fechas 50 países emitieron un comunicado conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de las elecciones que el Gobierno prevé celebrar el 7 de noviembre.

- OEA, [La CIDH y su REDESCA instan a Nicaragua al cese inmediato de hostigamientos en contra del sector médico](#), 28 de julio de 2021.
- VOA, [La CIDH condena hostigamiento al gremio médico en Nicaragua](#), VOA, 28 de julio de 2021.
- Associated Press, [Acoso y amenazas a médicos en Nicaragua por hablar del COVID](#), AP, 20 de septiembre de 2021.



TEMAS GLOBALES

ÁFRICA. Persiste la desigualdad en la distribución y acceso a la vacuna de la COVID-19

MEDIO AMBIENTE: Las restricciones vinculadas a la pandemia provocan en parte el incremento de asesinatos de defensores del medio ambiente en todo el mundo

ÁFRICA

Persiste la desigualdad en la distribución y acceso a la vacuna de la COVID-19

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo nueve países africanos han cumplido el objetivo de vacunar al 10% de su población contra la COVID-19 a finales de septiembre de 2021. Además, la OMS alertó de que solo el 4% de la población de África está completamente vacunada con las pautas correspondientes de la vacuna. También reseñó que de los nueve países que han cumplido con el objetivo, varios tienen poblaciones relativamente pequeñas, incluidas las naciones insulares de Mauricio y las islas Seychelles, que han vacunado completamente a dos tercios de su población. Estos datos muestran el rezago del continente con respecto a las tasas mundiales de vacunación, y hacen inviable lograr el objetivo de que al menos el 40% de la población esté vacunada para finales de 2021. Según OMS África, al ritmo actual, los países no alcanzarán este objetivo de vacunación hasta el próximo mes de marzo de 2022, por lo que para lograr el objetivo, así como el de vacunar al 70% de la población para septiembre de 2022, los envíos de vacunas al continente deberían multiplicarse por siete, de un promedio de aproximadamente 20 millones por mes a 150 millones.

Diferentes líderes africanos aprovecharon la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en septiembre para solicitar una renuncia temporal de ciertos derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el fin de permitir que más países, particularmente países de ingresos bajos y medianos, puedan producir sus propias vacunas COVID-19. Además, la propia Unión Africana (UA) ha solicitado un acceso justo al mercado de vacunas, acaparado en la actualidad por las naciones ricas. Según cálculos de AFP, en África solo se han administrado nueve dosis de vacuna por cada 100 personas, mientras que en Estados Unidos y Canadá la cifra es de 118 dosis por cada 100 personas; 104 en Europa; 85 en Asia; 84 en América Latina y el Caribe; 69 en Oceanía y 54 en Oriente Medio. Este escenario se produce en medio de la prolongación de la tercera ola de infecciones por coronavirus en el continente debido al impacto de la variante Delta, si bien, a finales de septiembre ya se observaba una

reciente disminución de nuevos contagios, según datos del Africa Centres for Disease Control & Prevention. A principios de septiembre se habían registrado en el continente 200.254 muertes desde el inicio de la pandemia en diciembre de 2019. Aunque la OMS ha alertado que si se tiene en cuenta el exceso de muertes relacionadas directa o indirectamente con el coronavirus, la cifra real podría ser dos o tres veces mayor.

- The New York Times, [Most African Countries Missed a Target to Vaccinate 10 Percent of Their People](#), *The New York Times*, 1 de octubre de 2021.
- Sarah Newey, [Empty Vaccine Promises Have 'Undermined the Global Health System,' Says WHO Africa Chief](#), *Telegraph*, 24 de septiembre de 2021.
- Al Jazeera, [African Leaders Highlight Vaccine Inequity in UNGA Speeches](#), *Al Jazeera*, 23 de septiembre de 2021.
- Bloomberg, [Third Wave of Virus Infections Continues to Rage in Africa](#), *Bloomberg*, 15 de septiembre de 2021.
- AFP, [Africa COVID Death Toll Tops 200,000](#), *AFP*, 9 de septiembre de 2021.
- OMS Africa, [COVID-19 variants prolong Africa's pandemic wave](#), 9 de septiembre de 2021.

MEDIO AMBIENTE

Las restricciones vinculadas a la pandemia provocan en parte el incremento de asesinatos de defensores del medio ambiente en todo el mundo

Un informe de la ONG Global Witness señala que en 2020 se registraron 227 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo, la cifra más alta desde que la organización computa tal fenómeno en 2012. En 2019, que hasta el momento había sido el año con un mayor número de dichos asesinatos, se registraron 212 homicidios. Según el informe, el confinamiento domiciliario que se produjo en muchos países motivado por la pandemia de la COVID-19 habría provocado que las personas defensoras del medio ambiente fueran más fáciles de localizar. Además, la pandemia también habría provocado un colapso y parálisis de los sistemas legales, administrativos y judiciales para procesar tales crímenes, alentando así la impunidad. Global Witness también señala que en 2020 se observó una mayor variedad de amenazas



TEMAS GLOBALES

contra las personas defensoras del medio ambiente, incluyendo intimidación, campañas de criminalización y desprestigio, hostigamiento o violencia sexual.

Por regiones, América Latina concentró tres de cada cuatro ataques registrados en 2020, mientras que siete de los diez países más afectados por este fenómeno eran latinoamericanos. Los dos países con un mayor número de asesinatos vinculados a la defensa del medio ambiente fueron Colombia (65), México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y Tailandia (2). En México se registró un incremento del 67% en el número de asesinatos respecto del año anterior, mientras que en Nicaragua se pasó de cinco asesinatos en 2019 a 12 en 2020, convirtiéndose así en el país con una mayor incidencia de asesinatos en relación al tamaño de su población. Colombia fue por segundo año consecutivo el país con mayor número de casos, y los ataques contra personas defensoras del medio ambiente se produjo en un contexto de una creciente hostilidad y peligro contra personas defensoras de derechos humanos en general y contra líderes comunitarios. Global Witness también enmarcó la violencia contra defensores de medio ambiente en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos previsto en

el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, y que según la organización es percibido como una amenaza por parte de organizaciones paramilitares y de crimen organizado. También cabe destacar que el 30% de los asesinatos tuvieron lugar en contextos en los que había proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructuras, minería o agroindustria. De entre estos proyectos, la tala ilegal de árboles fue el sector en el que se registró un mayor número de asesinatos (23). Finalmente, Global Witness señala que un tercio del total de asesinatos en América Latina y Filipinas fueron indígenas, y que cinco de los siete asesinatos masivos que se produjeron en el mundo en 2020 involucraron a población indígena.

- [EFE, Colombia y México, los países del mundo donde matan a más líderes ambientales](#), *EFE*, 13 de septiembre de 2021
- [Global Witness, Last line of defence](#), *Global Witness*, septiembre de 2021
- [Andrea Amaya Porras, Más de 220 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2020](#), *France24*, 13 de septiembre de 2021
- [África Gelardo Arrebola, 227 personas fueron asesinadas en 2020 por defender el medio ambiente](#), *El Diario*, 13 de septiembre de 2021



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El observatorio online bimensual sobre COVID-19, conflictividad armada y construcción de paz pone especial atención a las regiones prioritarias para la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en línea con su plan director (2019-2022). El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.